laverdad.es

IMPRIMIR

IMPRIMIR ARTICULO

PROVINCIA

PROVINCIA ALICANTE

ELCHE / Agricultura fija el inicio de las obras del postrasvase para finales de año

El embalse de SAT San Enrique, que se hará en terrenos cedidos por el municipio ilicitano, costará tres millones de euros

GENOVEVA MARTÍN/ELCHE

Maciá habla de solución integral

Publicidad

La asamblea general ordinaria de la Sociedad Agraria de Transformación(SAT) San Enrique, que junta a la de San Pascual y al Ayuntamiento de Elche, tiene derechos históricos sobre el agua del Júcar, congregó ayer en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx a las primeras espadas de la Comunidad Valenciana en materia de recursos hídricos. Estuvo el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, el ingeniero de Caminos del Instituto Euromediterráneo del Agua y redactor del Libro Blanco del Agua y del trasvase Júcar-Vinalopó, Francisco Cabezas Calvo-Rubio, el presidente de Riegos de Levante y vicepresidente del Sindicato Central Tajo-Segura, Manuel Richarte, el ingeniero de la SAT San Enrique, Ángel Urbina, el presidente de la Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, el secretario autonómico de la Conselleria de Agricultura, Antonio Rodríguez Barberá, y el alcalde de Elche, Diego Maciá Antón.

Los asuntos a tratar no eran otros que la polémica situación actual del trasvase Júcar-Vinalopó, el análisis de las alternativas ofrecidas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, los bancos de agua y la situación del postravase del Júcar con la construcción de la tubería de San Enrique y el nuevo embalse de la Cova del Planet, en la partida de Carrús. Cinco de los seis participantes (el alcalde de Elche y presidente del PSPV fue obviamente el disidente) fueron extremadamente críticos con la política hidrológica del Gobierno central, en particular con la paralización de las fases, dos, tres y cuatro de las infraestructuras del trasvase Júcar-Vinalopó a consecuencia del cambio de la toma de agua.

Andrés Martínez , que dijo no querer entrar en polémica, fue sin embargo tajante a la hora de analizar el lugar de la toma de agua en el Júcar. Volvió a abogar por la decisión inicial situada en el embalse de Cortes de Pallás, «única solución viable», por su calidad y por ser la más barata. Insistió en que «no tenemos subvenciones y el agua no debe salir a más de 10 céntimos de euros el metro cúbico». Aseguró que el precio de 19 céntimos o 20 céntimos del que ha hablado el consejero delegado de la sociedad estatal Aguas del Júcar, José María Marugán, es inviable. Martínez aseguró que el territorio de la Junta Central de Usuarios «no es el político» y que «se seguirá luchando con rigor».

Crítico

Cabezas estuvo aún más crítico, aunque apoyó toda su argumentación sobre datos técnicos. Explicó que la toma decidida por Gobierno central en el Azud de la Marquesa tiene un caudal similar al de Cortes de Pallá, lo que le hizo decir que «el argumento del volumen es técnicamete falso».

Añadió en contra de la toma del Azud de la Marquesa que las conducciones son más largas, con más estaciones de bombeo para elevar el agua (cuatro en total) y por tanto, con una explotación mucho más cara. Cabezas se metió también con el argumento del Ministerio de Medio Ambiente sobre la tesis de la paz social. Insistió que no hubo ninguna disidencia a la hora de elegir Cortes de Pallá y que sólo hubo problemas cuando se cambió la ubicación de la toma de agua. Concluyó con «no

encuentro razones económicas, ambientales ni de tipo hidrológico que justifiquen el cambio», e hizo voto para que «se imponga la lógica».

Tampoco parece ser una solución la puesta en marcha de los bancos de agua, según Manuel Serrano. Su argumento es muy sencillo. Mientras no exista la interconexión de cuencas mediante tuberías, de nada sirve las cesiones de derechos y los bancos de agua. Serrano subrayó que dentro de dos años se acaban las ayudas europeas a la agricultura, lo que va a propiciar que muchos cultivos ya no sean competitivos. Afirmó que muchos agricultores tendrán que vivir entonces de la cesión de sus derechos de agua, como es el caso ya de «comunidades de regantes del Ebro que quieren vendernos caudales, pero no pueden hacerlo por falta de infraestructuras». Serrano, al igual que el resto de la mesa aseguró que «sólo será competitiva la agricultura del mediterráneo» y, en particular de esta zona, siempre y cuando tenga agua, y «la hay».

400.000 metros cúbicos

La buena noticia de la asamblea, si se cumplen las promesas, la trajo el secretario autonómico de Agricultura. A expensas de que las infraestructuras del trasvase Júcar-Vinalopó se completen, las del postrasvase que interesan a los ilicitanos podrían estar terminadas dentro de veinte meses.

Rodríguez Barberá aseguró que las obras se licitarán antes de finales del presente año. Se tratan de dos conducciones y del nuevo embalse de San Enrique, situado en la partida de Carrús, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Elche. Dicho embalse tendrá una capacidad de 400.000 metros cúbicos y un costo de más de tres millones de euros. Se supone que servirá para almacenar los caudales del trasvase del Júcar.

El conseller de Infraestructuras apoyó los argumentos de sus compañeros de mesa y fue tajante. «No hay agricultura posible sin trasvase». Y para él, el trasvase fundamental es el del Ebro. Dijo: «Para nosotros, los de la provincia de Alicante, es vital». Estuvo de acuerdo con Serrano en que sin interconexiones de cuencas, los bancos de agua no sirven y achacó a meras razones políticas tanto el cambio de toma del trasvase Júcar-Vinalopó como a la derogación del del Ebro. Opinó que «las desalinizadoras no son alternativas, sólo sirven de apoyo coyuntural». Según el conseller, el Gobierno no tiene más que hacer y financiar el trasvase del Ebro.